



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 25429 / 2024 - AML

Autos: “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA Y MUTUALIDAD HOSPITAL ESPAÑOL DE MENDOZA c/ AFIP-DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva del Expte Nro. 25429/2024

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

1) Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2024-144-E-AFIP -DVRRME#SDGOPII, la Administración Federal de Ingresos Públicos, desestimar la impugnación interpuesta por la contribuyente SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA Y MUTUALIDAD HOSPITAL ESPAÑOL, contra la deuda determinada en las Actas de Inspección originadas en la Orden de Intervención N° 2.017.463, notificadas el 07 de septiembre de 2022 por los Recursos de la Seguridad Social, acorde con los fundamentos vertidos en el dictamen jurídico que la antecede.

2) De todo ello, se notificó a la contribuyente, haciéndosele saber que la resolución era susceptible de ser revisada por medio del procedimiento establecido en el punto 8 de la Resolución 79/98 AFIP, o por la vía del recurso de apelación ante esta Alzada, debiendo depositar dentro de los plazos correspondientes el importe resultante de la resolución administrativa (cfr. art. 15 de la ley 18.820 y art. 39 bis del decreto-ley 1285/58 modificada por la ley 24.463).

Conforme se desprende de las presentes actuaciones, la parte actora recurre a esta instancia judicial, sin efectuar el pago previo a la apelación como requisito de admisibilidad. En su reemplazo, el organismo fiscal informa que, la recurrente ofreció seguro de caución, de acuerdo con la póliza emitida por Premiar Compañía Argentina de Seguros S.A.

Al respecto, esta Sala en autos “Parflik S.A.C.I.F.I.A.”, de conformidad con las conclusiones expuestas en el dictamen del Sr. Fiscal General N° 4935/93 (Fiscalía General N° 2) de fecha 22/12/93, sostuvo que el depósito previo a la apelación que exige el art. 15 de la ley 18.820 para la concesión del recurso importa el cumplimiento provisional y adelantado de la condena, constituyendo así una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido. (SD 57.859, del 14/4/94). En idéntico sentido, la Sala II en autos “Compañía de Servicios Hoteleros S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda”, SD 110.602, la Sala III en autos “Treves Argentina S.A. c/ AFIP – DGI s/ Impugnación de deuda y esta Sala I en autos “Frigorífico Gorina S.A.I.C. c/ A.F.I.P. – D.G.I s/ Impugnación de deuda”, SD 124.944.

En consecuencia, la fianza acompañada, garantiza el pago de las obligaciones reclamadas, en virtud del principio “solve et repete”, por lo que debe eximirse al recurrente de la carga impuesta en la normativa reseñada y declarar formalmente admisible el recurso.



3) La parte actora se agravia de la interpretación y aplicación del decreto 633/2018 y de la ley 24.004, ya que el organismo resolutor hace extensiva la obligación de pagar la contribución patronal adicional sobre todo el personal de enfermería, siendo que el art. 24 del mismo cuerpo legal, circunscribe dicha obligación sólo a los enfermeros que desarrollan tareas insalubres.

Agrega que el Fisco yerra en la aplicación de la norma, ya que el régimen de enfermería no deja lugar a dudas toda vez que describe expresa y taxativamente en los incs. a) y f) de su art. 24, aquellas tareas que desarrolladas por los trabajadores de enfermería les permite el acceso anticipado a la jubilación.

Expresa que el organismo fiscal no ha valorado las pruebas ofrecidas, restando absoluta credibilidad a los argumentos de hecho vertidos, a la prueba documental y pericial contable, como así también a los distintos testimonios.

4) Entrando a resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, cabe destacar que los presentes obrados tuvieron origen en el procedimiento de auditoría fiscal efectuado a la contribuyente, que tuvo por objeto la verificación del cumplimiento a las disposiciones vigentes respecto al Régimen Nacional de Seguridad Social.

En el marco del procedimiento de auditoría, el equipo de inspección procedió a analizar la documentación e información que se encontraba a su disposición. Como resultado, concluyó que existían empleados declarados como Personal de Enfermería y Ayudante de Enfermería, siendo su puesto y cargo extraído de la información que surge de Mi Simplificación Registral (información ingresada por la contribuyente), por los cuales no se ingresó la alícuota diferencial del 2% establecida en el Decreto 633/2018, para el personal que desarrolle tareas insalubres, conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley 24.004.

De esta manera, la citada norma establece que “a los efectos de la aplicación de normas vigentes que, para resguardo de la salud física o psíquica, establecen especiales regímenes de reducción horaria, licencias, jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección, considéranse insalubres las siguientes tareas de la enfermería: a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos; b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiátricas; c) Las que conllevan riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas; d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean éstas ionizantes o no; e) La atención de pacientes oncológicos; f) Las que se realizan en servicios de emergencia. La autoridad de aplicación queda facultada para solicitar, de oficio o a pedido de parte interesada, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ampliación de este listado”.

Así, el decreto 633/2018 determina la exigibilidad de las contribuciones patronales adicionales para los regímenes diferenciales y establece que a partir del 1º de agosto de 2018, será obligatorio el pago del mismo (que es un 2% adicional).

Las actividades beneficiarias de un régimen previsional diferencial cuya vigencia mantienen por el artículo 157 de la Ley N° 24.241, se encuentran regidas por las normas que les otorgaron dicho carácter, junto con todas las demás normas que las





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

hayan complementado o modificado con posterioridad, conforme surge de lo preceptuado en el artículo 156 de dicha ley.

Específicamente rige el artículo 20 del Decreto N° 688/76, por el que se suprimieron los aportes diferenciales a cargo de los trabajadores en relación de dependencia y se unificaron en DOS (2) puntos las contribuciones adicionales a cargo de los empleadores.

De la mencionada norma, se desprende que no impone al trabajador ningún tipo de aporte adicional para el acceso al beneficio, sino que pone en cabeza del empleador una contribución previsional especial.

Sentado ello y, efectuada una breve descripción de la normativa aplicable, la cuestión a resolver radica en si corresponde o no el aporte de la contribución previsional especial de dicho porcentaje por la aquí apelante, motivo del cargo formulado por el organismo.

La contribuyente alega que ha habido un error al declarar en el sistema la actividad que realizan los empleados, con posterioridad efectúa una clasificación y elabora tres planillas, distinguiendo entre empleados que no realizan trabajos de enfermería (67) y empleados que son enfermeros y dentro de esta categoría los divide en aquellos que no desarrollan tareas insalubres (202) y los que realizan tareas insalubres (42), no distingue por periodos; afirma que la contribución adicional del 2% solo corresponde a los enfermeros que desarrollan tareas insalubres; alega problemas en el aplicativo por los cuales no pudo declarar y pagar el 2% adicional en los periodos 01/2021 al 10/2021.

De las constancias de autos y las piezas obrantes en los DEO adjuntados, existen hechos controvertidos por los que el organismo administrativo debió extremar las medidas a fin de lograr la elucidación de los hechos debatidos, esto es desentrañar qué personal desempeña trabajos de enfermería y cuáles no y dentro de esa clasificación verificar los que efectúan tareas insalubres a los efectos de determinar si corresponde o no que se abone el 2% de contribución adicional por dicha tarea.

En reiteradas oportunidades este Tribunal manifestó que en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada. Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo ( ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss. ).

Por ello es claro entonces que no se ha cumplido con la garantía del debido proceso adjetivo derivado del art. 18 CN , con lo que ello implica: a) derecho a ser oído; b) derecho a ofrecer y producir pruebas; c) derecho a una decisión fundada. Al valorar las distintas pruebas, el organismo administrativo debe actuar con razonabilidad, a fin de que sus pronunciamientos produzcan efectos jurídicos válidos,



debiendo arbitrar las medidas tendientes a indagar la verdad objetiva de los hechos (cf. art. 1º incs. a,b,c y f de la ley 19549).

En sentido análogo se ha pronunciado esta Sala en “TRIUMPH INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. C/AFIP - D. G. I. s/ impugnación de deuda” (Expte. n° 23.796/04, Sent. Def. 113.653/05 del 18/04/05), entre otros.

Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la resolución recurrida y devolver las actuaciones al organismo de origen para que previa producción de la prueba ofrecida que resulte conducente para dilucidar la cuestión, de acuerdo a lo expuesto en la presente, dicte otra nueva con arreglo de derecho.

5) Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por lo expuesto el TRIBUNAL RESUELVE. I.- Declarar formalmente admisible el recurso. II.-Dejar sin efecto la resolución recurrida y devolver las actuaciones al organismo de origen para que previa producción de la prueba ofrecida, dicte otra nueva con arreglo de derecho. III- Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública –dependiente de la CSJN (conf. Ac. 10/25) y, oportunamente, remítase.

